Chile: Autoritarismo y lucha democrática en 1986

Luis Maira

1. *La dictadura chilena en el contexto sudamericano*

La década de los ochenta ha resultado devastadora para los regímenes militares de América del Sur.¹ Hace diez años Colombia y Venezuela eran los únicos países gobernados por presidentes civiles mientras que Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile tenían gobiernos militares. Al empezar 1986, en cambio, el autoritarismo y los gobernantes castrenses son la excepción al punto que sólo dos países continúan regidos por sistemas políticos con esas características: Paraguay que tiene la dictadura más antigua del continente —el General Alfredo Stroessner detenta el poder desde 1954— y Chile donde el General Augusto Pinochet se sostiene en el mando desde el sangriento golpe de estado de septiembre de 1973.

En un panorama político como el de América Latina en que dictadura y democracia se han alternado cíclicamente durante un largo tiempo es difícil predecir la estabilidad de los nuevos gobiernos emanados de la voluntad popular a través de procesos electorales. Estos enfrentan inmensos desafíos como la necesidad de superar la desarticulación del aparato político legado por el autoritarismo, las exigencias para dar satisfacción a las expectativas de trabajo, consumo básico y progreso social acumuladas por los sectores medios y populares y la resolución de los problemas que coloca el agobiante endeudamiento externo de sus economías.² Pero de lo que no cabe duda en este momento es que los regímenes de fuerza que todavía subsisten en la parte Sur de América hacen frente a una situa-

ción de crisis que se agudiza día a día, irremisiblemente.

En Paraguay la oposición se ha agrupado en torno a un Acuerdo Nacional en que participan desde las tradicionales corrientes opositoras como liberales, demócratas cristianos y febreristas hasta sectores disidentes del oficialista Partido Colorado. La disidencia al General Stroessner incluye, en términos sociales, a prácticamente la totalidad de los sectores sindicales y a todas las organizaciones que se articulan en torno a la Iglesia Católica. En un cuadro en que se entremezclan la declinación física del anciano dictador y las crecientes denuncias de corrupción, el régimen paraguayo atraviesa por primera vez por dificultades serias que amenazan su continuidad, situación que se ha acelerado luego del advenimiento de los gobiernos de Raúl Alfonsín y José Sarney en Argentina y Brasil, sus influyentes vecinos.

Lo propio ocurre en Chile aunque en un contexto mucho más complejo. La dictadura del General Pinochet tiene un alto valor simbólico que la ha convertido en un referente autoritario a escala mundial. Esto ha ocurrido tanto por el interés que atrajo la experiencia de la "vía chilena al socialismo" ensayada por el Presidente Salvador Allende entre 1970 y 1973 como por las características particularmente duras y represivas que el gobierno militar presentó al instalarse en el poder y que incluyeron desde el bombardeo aéreo del Palacio Presidencial hasta el uso de estadios y grandes lugares públicos como establecimientos de detención política. Todo esto hizo que Pinochet alcanzara una notoriedad universal y que su régimen deba hacer frente desde entonces a un severo aislamiento internacional que prácticamente no se ha interrumpido en ningún momento en su ya largo mandato.

En cualquier caso, un análisis riguroso de la situación chilena actual debe comenzar por una caracterización de la propia dictadura. Hace diez años se consideraba virtualmente idénticos a todos los gobiernos militares sudamericanos.³ Ellos compartían una doble

1 Para los efectos de este trabajo incluimos en la expresión "América del Sur" sólo a los países latinoamericanos, excluyendo a Suriname y Guyana que si bien están situados en la cabecera del subcontinente mantienen una vida de relación e intercambios preferentes con los estados situados en la subregión del Caribe a la que se les asimila.

2 Los gobernantes de estos países, especialmente los presidentes Raúl Alfonsín y Alán García han usado numerosas veces las amplias tribunas internacionales de que disponen para exigir una mayor comprensión de Estados Unidos y subrayar las amenazas y dificultades que afrontan.

3 Véase al respecto el debate planteado en los trabajos del libro *El*

matriz ideológica que los aproximaba. Por una parte, aplicaban una concepción oficial la Doctrina de Seguridad Nacional en una versión derivada de la formulación original norteamericana. Esto significaba: un rígido encuadramiento Este-Oeste de todos los conflictos domésticos, la proclamación del "comunismo internacional" como el enemigo supremo del Estado y de la Nación, la descalificación de la democracia liberal por su incapacidad para contener a este enemigo y una difundida lógica de "guerra interna" que buscaba consolidar un horizonte estratégico para la implantación de los gobiernos de fuerza. Junto a ello, aplicaban esquemas y concepciones de política económica claramente ligadas a las visiones neo-liberales, propiciaban una completa apertura de sus economías frente a los circuitos internacionales, la vigencia del principio de las "ventajas comparativas" y exhibían una indomable voluntad para desregular los "entramientos burocráticos y estatistas" que impedían el pleno despliegue de la actividad empresarial.

Las semejanzas que producía la adhesión a estos dos pilares fundamentales del autoritarismo político y el liberalismo económico indujo a muchos observadores a subrayar más los parecidos que las diferencias de los modelos autoritarios vigentes en diferentes países sudamericanos. Con el correr del tiempo, sin embargo, los factores nacionales de cada país fueron cobrando creciente relieve. A la larga ellos han sido los que han explicado la declinación, primero, y el colapso, después, de estas dictaduras.⁴

A la luz de una perspectiva que subraye los factores más peculiares y específicos de cada experimento autoritario, el gobierno del General Pinochet aparece como especialmente "distinto" de sus congéneres. En estos factores precisamente, podemos encontrar las claves que explican su supervivencia.

En primer término, el General Pinochet se apartó de las pautas de ejercicio del poder político por los mandos militares institucionales (las llamadas "dictaduras institucionalizadas") que caracterizaron a las restantes dictaduras militares. En lugar de radicar las decisiones políticas en el cuerpo de generales y almirantes que integran la cúpula directiva de las diversas ramas de las fuerzas armadas, fue concentrando en sus propias manos el manejo de todos los asuntos públicos. Esta progresiva "personalización" del poder culminó en 1978 cuando Pinochet sacó de la Junta Militar al General Gustavo Leigh, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, quien aparecía como la única perso-

nalidad militar capaz de amenazar su poder. Desde entonces el ejército, al igual que las demás instituciones militares y de seguridad parecen claramente subordinadas a los designios del Jefe del Gobierno aunque no comparten con él ninguna decisión importante que afecte a la marcha del estado chileno. En este proceso, no cabe duda, ha jugado un rol muy funcional la antigua mentalidad prusiana predominante en el ejército chileno desde fines del siglo XIX que hace del principio de la verticalidad del mando y la obediencia un dogma indiscutible.

Una segunda clave del poder político de Pinochet ha sido su capacidad para mantener su posición efectiva como Comandante en Jefe del Ejército, la rama que sin duda asume una posición hegemónica al interior de las Fuerzas Armadas chilenas. Quienes siguen más directamente las actividades cotidianas de Pinochet subrayan siempre la gran atención que éste presta a su posición de jefe efectivo del ejército. En su despacho se resuelven todos los ascensos y destinaciones de los altos oficiales, durante sus giras por el país el contacto con las unidades militares en un punto prioritario, del mismo modo que lo es la planeación militar, junto a sus colaboradores más estrechos y leales, de la "guerra" contra la amplia gama de sus opositores internos. Este atento escrutinio del quehacer militar le permite a Pinochet detectar el surgimiento de cualquier oficial que dentro del ejército pudiera amenazar su poder personal, decidiendo su inmediato alejamiento de las filas.

Finalmente, Pinochet ha captado con especial agudeza el valor de los procesos de institucionalización del poder. Gradualmente ha ido revistiendo de apariencias de legitimidad su desnudo poder inicial. En poco tiempo cambió su título de Presidente de la Junta Militar de Gobierno por el de "Jefe Supremo de la Nación", para terminar adoptando el de "Presidente de la República", todavía más respetable en la tradición política chilena. Luego de desechar las fórmulas moderadas que lo habrían sacado del poder a mediados de los años ochenta, como la propuesta en el Consejo de Estado por el ex Presidente civil Jorge Alessandri, el General Pinochet hizo aprobar en septiembre de 1980 una Constitución que le confiere el ejército total, y por un tiempo virtualmente indefinido, del gobierno.

La Constitución de 1980 estableció un período presidencial de ocho años (1981-89) susceptible de prolongación en un segundo mandato (1989-1997) a través de un plebiscito uninominal que debía efectuarse a fines de 1988, lo que hace que su horizonte de poder político coincida prácticamente con el de su existencia física (del mismo modo que lo lograra el dictador español Francisco Franco a quien Pinochet

Control Político en el Cono Sur, varios autores, Editorial Siglo XXI, México, 1976.

⁴ Hemos insistido en este punto en trabajos anteriores incluidos en mi libro *Chile: autoritarismo, democracia y movimiento popular*, Editorial CIDE, México, 1984.

admira especialmente: si se cumplieran sus deseos para 1997 cuando culminara su "segundo período constitucional", Pinochet tendría 82 años de edad).⁵ Pero además el texto constitucional está dominado por una lógica de rechazo a los valores y principios de la democracia liberal: consagra la proscripción ideológica de las "concepciones totalitarias", lo que dejaría convertidos en fuerzas extrasistema a todos los partidos de izquierda; asegura un poder de veto a los sectores militares a través de un Consejo de Seguridad Nacional; imagina un funcionamiento restrictivo de los derechos políticos y las libertades públicas y contempla un mecanismo particularmente rígido de reformas de sus propias disposiciones lo que constituye un gran obstáculo al planeamiento de cualquier transición política que busque superar el estrecho marco de una democracia restringida colocado por el texto de 1980.

El juego combinado de estos tres factores —la personalización y concentración del poder político, la fusión de la autoridad política y la militar y la institucionalización de pautas antidemocráticas— explican la porfía y la capacidad de respuesta que Pinochet muestra ante sus opositores. Los sectores democráticos chilenos aparecen en muchos aspectos más fuertes y mejor organizados que sus equivalentes brasileños, uruguayos o argentinos. También es mayor la fortaleza de las organizaciones populares (sindicatos, federaciones estudiantiles, colegios profesionales y organismos de pobladores) los que además cuentan con una conciencia democrática y una memoria histórica mayor. Sin embargo, el régimen militar chileno no ha caído, a pesar de la amplitud de las protestas organizadas en su contra porque Pinochet es un dictador especialmente fuerte y ha mostrado, desde su lógica de guerra una gran capacidad para contragolpear, desorganizando y dividiendo a sus adversarios, a la vez que una no despreciable habilidad para descalificar sus propuestas y alternativas.

El escenario chileno ofrece así en los últimos años, el singular interés que proyecta la confrontación de una oposición socialmente fuerte con un dictador que retiene un gran poder represivo y una apreciable iniciativa política. En este juego de fuerzas planteado desde mayo de 1983 (cuando se efectuara la primera protesta nacional), los avances de los sectores que buscan una transición democrática se han visto dificultados por una serie de activas maniobras que ha realizado el propio Pinochet con miras a desarticular sus pla-

nes. Esto ha hecho que el estrechamiento del cerco democrático haya sido en Chile más lento y más difícil que en los países vecinos. Con su conducta Pinochet ha demostrado también que una combinación de sagacidad e inescrupulosidad en el ejercicio del poder puede constituir un factor capaz de retardar y dificultar la realización de las demandas democráticas. De algún modo se ha verificado en Chile el cumplimiento de una especie de ley en el funcionamiento de las modernas dictaduras militares que se funden en las concepciones de seguridad nacional: cuando se inicia el asedio de las dictaduras por parte de una sociedad civil que exige democracia, los regímenes personalizados presentan una mayor capacidad de "resistencia" que las dictaduras militares que han institucionalizado el ejercicio del poder a través de sus mandos regulares.

En las dictaduras militares "institucionalizadas" tanto la sensibilidad frente a lo que acontece en la sociedad como la disposición a la negociación son mayores. La explicación de esto es que los colectivos de altos oficiales de las Fuerzas Armadas perciben de múltiples maneras las señales de crisis que provienen del mundo civil. Esto hace que al interior de las instituciones armadas brote una deliberación política que muestra cuan acertadas fueron aquellas caracterizaciones que sostuvieron que, en las dictaduras institucionalizadas las Fuerzas Armadas funcionaban como un verdadero partido político (o si se prefiere como una coalición de partidos políticos para tomar en cuenta la diferenciación orgánica de sus distintas ramas).⁶ Así, la discusión acerca de la diversidad de opciones y caminos que es consustancial a la política acaba penetrando en el interior de los mandos militares, poniendo fin al monolitismo cerrado e introduciendo los desacuerdos y la deliberación. Entonces, finalmente en un cierto momento de desarrollo de la crisis, los militares se ven enfrentados ante el dilema inevitable de regresar a sus cuarteles y al cumplimiento de su función profesional como la única forma de impedir el riesgo de una división interna y el enfrentamiento abierto entre los propios sectores castrenses.

Nada de esto ocurre, en cambio, cuando el poder está concentrado en una sola mano. En estos casos el dictador toma conciencia en forma mucho más borrosa de las posiciones de la mayoría de la sociedad,

5 El General Pinochet ha dejado constancia en diversas entrevistas (especialmente en la que concedió al periodista Edward Schumacher del "New York Times" en mayo de 1984) de su admiración por el pensamiento y la estrategia del caudillo español Francisco Franco, al que busca emular.

6 El esclarecimiento de este rasgo de las nuevas dictaduras militares fundadas en la doctrina de seguridad nacional fue un lúcido y temprano aporte de L.A. Costa Pinto en el libro *Nacionalismo y militarismo*, Editorial Siglo XXI, México 1971. Una reflexión original de las relaciones entre el ejercicio institucional del poder por las Fuerzas Armadas y sus márgenes de cohesión interna puede encontrarse en el trabajo de John Samuel Fitch, "Las consecuencias políticas de la ayuda militar norteamericana a América Latina", publicado en el Volumen 4 de *Cuadernos Semestrales de Estados Unidos*, CIDE, México, dedicado al análisis del tema "La dependencia militar latinoamericana".

puesto que por su propia naturaleza está aislado de ello y rodeado sólo de partidarios que le seleccionan la información apropiada. Las demandas por un proceso de democratización sólo sirven para acentuar el hermetismo del régimen, de acuerdo al paradigma de la "fortaleza sitiada". Concientes del carácter ineludible que tendrá para el círculo íntimo de los que detentan el poder, el esclarecimiento de las responsabilidades por crímenes, violaciones de derechos humanos o irregularidades financieras, estos se disponen a sostenerse en el mando por todo el tiempo que les resulte posible. Así, la lógica de las dictaduras personalizadas no es la de la negociación, sino la del "bunker". Los "conductores autoritarios" que las dirigen, al estar seguros y confiados de su superioridad en el terreno de la fuerza atizan el enfrentamiento y buscan, desde arriba, una polarización de la sociedad entre "amigos" y "enemigos", pues saben que sólo en ese terreno podrán compensar, con una mayor capacidad represiva, una posición social minoritaria. De hecho, advierten que al militarizar el tratamiento de todos los conflictos políticos y sociales, la propia evaluación de una correlación entre posiciones de "minoría" y "mayoría" se reduce grandemente, puesto que desde la cúpula del poder, al rechazar la legitimidad de todas las demandas, se les asocia con posiciones "extremistas" y "violentistas", enviando un recado al conjunto de la sociedad de que, cualquier petición de cambio político, será considerada subversiva y merecerá una respuesta de fuerza.⁷ Obviamente, en un cuadro así, el poder político reinante está en condiciones de dividir y enfrentar a los sectores civiles opositores, aunque estos representan a una amplia mayoría de la sociedad civil. La única condición para ello es que el dictador mantenga la lealtad de los núcleos hegemónicos de las Fuerzas Armadas y que pueda asegurar la mantención de su capacidad operativa.

2. Los desencuentros de la oposición

Los opositores de las dictaduras no siempre comprenden cabalmente otra de las enseñanzas que fluyen de cualquier examen comparativo de los sistemas políticos autoritarios. Esta consiste en que los métodos de

lucha y las estrategias para ponerle término a una dictadura no se inscriben en el cuadro de los principios o de las "verdades teóricas", sino que están directamente vinculadas, en su corrección y eficacia, al propio perfil constitutivo del régimen que se busca remplazar.

Sabemos que en teoría, existen tres maneras de acabar con una dictadura:

-*Primero*, por medio de una *negociación intra-sistema* con el titular de un régimen autoritario o con un sector disidente de éste, cuando éstos perciben un desgaste insuperable del proceso político que encabezan y están dispuestos a sentarse a una mesa para ajustar las condiciones de entrega del poder;

-*Segundo*, a través de un *enfrentamiento militar* que coloca frente a las Fuerzas Armadas del régimen a un poder militar alternativo que las enfrenta y que finalmente produce el colapso mediante una derrota militar del sistema y

-*Tercero*, por el desarrollo de un proceso de resistencia social basado en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y populares que levantan una propuesta de democratización y despliegan una estrategia de desobediencia civil generalizada, la cual culmina en la paralización de las actividades nacionales y provoca una *derrota política* del régimen autoritario al demostrar que es incapaz de administrar el país y mantenerlo en funcionamiento.

Ninguno de estos caminos tiene, por sí mismo, la virtualidad de lograr el objetivo común que persigue. Es la naturaleza propia de cada modelo autoritario la que determina para un país determinado la validez de una u otra fórmula. Por lo mismo, resulta imposible invocar las experiencias históricas anteriores como un elemento unívoco de apoyo de una cierta opción, puesto que las experiencias existentes abonan justamente el criterio de que son posibles diversas y diferenciadas salidas a partir de realidades sociales también distintas.

La historia reciente de América Latina confirma abrumadoramente esta diversidad de opciones. En el término de las dictaduras uruguayas (1985) y argentinas (1983) predominó un mecanismo de negociaciones que en el caso uruguayo adquirió expresión formal y material con las reuniones y actas de acuerdo logradas en el Club Naval. El derrocamiento de los regímenes de Fulgencio Batista en Cuba (1959) y Anastasio Somoza en Nicaragua (1979) se hizo en base a una confrontación militar que acabó desarticulando la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas que sostenían a la dictadura. Finalmente, en otros casos, como en la caída de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela (1958), la de Hugo Banzer en Bolivia (1979) o la más reciente de Jean Claude Duvalier en Haití (1986) el elemento determinante fue la capacidad de concentración de

7 La crisis del régimen de Ferdinand Marcos da cuenta de las complejidades que acompañan a las fases finales de un dictador con "vocación de bunker". Marcos, luego de tener que realizar anticipadamente elecciones presidenciales en Filipinas como resultado de las presiones que recibiera, a mediados de 1985, del enviado especial del presidente Reagan, el Senador Paul Laxalt, se las ingenió para realizar un gigantesco fraude y desconocer el claro triunfo logrado por la opositora, Corazón Aquino, amenazando luego con la reimplantación de la ley marcial, cuando los opositores, con el apoyo de la Iglesia Católica llamaron al pueblo a realizar actividades de desobediencia civil generalizada.

los sectores civiles para lograr una interrupción prolongada de las actividades productivas y desencadenar una crisis política irreversible.⁸ Probablemente, si en cualquiera de estos países se hubiera intentado una fórmula distinta de la que condujo finalmente a la transición ésta no se hubiera producido o se hubiera retardado considerablemente.

Esto hace que un ejercicio decisivo para la eficacia del quehacer que las dirigencias democráticas impulsan sea la capacidad para examinar en conjunto la naturaleza de la situación interna que enfrentan y encontrar caminos comunes que permitan la suma de sus diferentes fuerzas. A la inversa, la tozudez en intentar por separado propuestas que se definen más en función de consideraciones ideológicas que de una revisión científica de su propia realidad nacional constituye una involuntaria, pero eficaz garantía de continuación de los regímenes autoritarios.

Subrayamos este tópico general porque creemos que ha sido decisivo en la situación chilena producida a contar de 1983. El mayor desacuerdo de los opositores chilenos tiene que ver con las insuficiencias en la caracterización del régimen de Pinochet. Al no ponerse de acuerdo sobre este punto (y en muchos casos al ni siquiera percibirlo como un asunto crucial que se debe resolver) se han desplegado —a veces con un sorprendente voluntarismo— estrategias paralelas que han anulado la eficacia de los núcleos democráticos y han originado estériles y significativos desacuerdos entre ellos.⁹

A primera vista parece evidente que una parte mayoritaria de la oposición está convencida de la validez para el caso chileno de una estrategia de derrota política. Pero, simultáneamente se advierte el peso y un

cierto poder de veto de pequeños grupos que propician los caminos de la negociación y de la derrota militar. Los primeros invocan en su apoyo los precedentes más recientes de Uruguay y Argentina, mientras que los otros levantan en su favor una lectura estrictamente militar de las experiencias cubana y nicaragüense. En los hechos esta disparidad ha fragmentado a una oposición que, de acuerdo a los pronunciamientos realizados en algunas organizaciones sociales,¹⁰ representa más del ochenta por ciento de la opinión política del país. Sin embargo, esta fuerza se diluye ante la inexistencia de un enfoque común y ante la mutua descalificación que se acaban haciendo entre sí los principales dirigentes de los partidos opositores.

Así, poco después del inicio de las protestas nacionales la oposición chilena se dividió en dos referentes políticos nacionales: la Alianza Democrática (AD), y el Movimiento Democrático Popular (MOP). La primera agrupa a los Partidos Republicano, Liberal, Social Demócrata, Radical, Demócrata Cristiano y Socialista (dirección: Carlos Briones). El segundo está formado por los Partidos Comunista, Socialista (dirección: Clodomiro Almeyda), Socialista XXIV Congreso, Socialista (Coordinadora Nacional de Regionales), Socialista (Comandantes), MIR, y MAPU Obrero Campesino, tendencia proletaria. Además, existen otras fuerzas de izquierda que están al margen de estas agrupaciones como la Izquierda Cristiana, el MAPU y los Partidos Socialista Histórico y dirección Manuel Mandujano. Esto hace que el escenario chileno esté dominado por la dispersión política y que en la práctica, resulte muy difícil conseguir un entendimiento de todos los que se definen como adversarios del General Pinochet.¹¹

Especialmente difícil ha resultado, hasta ahora, el entendimiento entre la AD y MDP. Aunque estas dos

8 En estricto rigor habría que sostener que esta conceptualización atiende al factor básico y desencadenante del fin de las dictaduras, porque en la práctica es muy difícil que un curso de acción se de en forma nítida y pura. Así, por ejemplo, la negociación uruguaya se hizo posible luego de dos paros nacionales que interrumpieron en forma total las actividades de la nación, mientras que la culminación del cerco militar de los sandinistas pudo llegar a feliz término gracias al desarrollo de las organizaciones populares en Managua y otras ciudades y al constante asedio que sus acciones civiles pusieron sobre el régimen de Anastasio Somoza hijo.

9 A este respecto el razonamiento más dañino es el que postula la necesidad de excluir a un sector de la izquierda, y en particular al PC, con el argumento de que "constituyen los enemigos históricos de las Fuerzas Armadas, cuya voluntad es decisiva para la transición democrática". Este razonamiento de algunos dirigentes chilenos de derecha y centro derecha ha condicionado, hasta ahora, el comportamiento de la directiva de la democracia cristiana dando por resultado la mantención de una división de la oposición. Paradójicamente, este hecho ha reducido la eficacia que habría tenido una oposición unida y le ha permitido al General Pinochet mantener el control y la disciplina de las Fuerzas Armadas, luego que éstas han visto que los sectores democráticos carecen de la fuerza necesaria para amagar al régimen.

10 Durante 1985 la oposición venció en prácticamente todas las elecciones realizadas para elegir directivas de confederaciones sindicales, colegios profesionales, federaciones universitarias y organizaciones de pobladores. Normalmente obtuvieron un respaldo del 80% o más de los electores y, en no pocos casos ni siquiera hubo listas oficialistas, en el curso de los últimos años la fuerza de estas organizaciones sociales creció en más de un 250% en materia de afiliados y participación institucional.

11 La gran fragmentación del Partido Socialista que fundara Salvador Allende constituye un serio obstáculo para una salida política en Chile, pues radica la mayor parte de la iniciativa en manos de la Democracia Cristiana y el Partido Comunista que se excluyen mutuamente. Si los diferentes sectores socialistas —históricos y nuevos— se unieron serían uno de los tres partidos más importantes de la oposición. En esta dirección es interesante el acuerdo de acción conjunta anunciado por la Izquierda Cristiana y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), a comienzos de febrero de 1986, esto crea una primera tendencia positiva y de concertación dentro del área socialista y puede tener un efecto positivo para un acuerdo de conjunto, la convocatoria que en conjunto tienen estos partidos, considerados los más importantes exponentes del "socialismo renovado" en Chile.

coaliciones proclaman una misma estrategia de movilización social contra la dictadura existen en el interior de ambos sectores influyentes que sostienen la validez de otros caminos y que impulsan conductas que llevan a la exclusión mutua. Al interior de la AD existe un polo que cree en la posibilidad y conveniencia de una negociación con el régimen y que trabaja en esta dirección. En el seno del MDP, por su parte, se advierte en muchos momentos conductas e interpretaciones que parten del supuesto de que es posible terminar con el régimen en base a la "fuerza propia", sin buscar concertaciones con el resto de la oposición e intensificando el empleo de la violencia. El punto más crítico es que estas contradicciones atraviesan también a los dos partidos políticos con mayor apoyo social que, de hecho, hacen de cabeza de sus respectivos bloques. En la Democracia Cristiana hay un sector moderado encabezado por el ex Senador Juan Hamilton que cree que es indispensable excluir a las fuerzas de izquierda en el proceso de liquidación de la dictadura de Pinochet por lo cual levanta objeciones a toda forma de colaboración con éstas. Por su parte, el Partido Comunista y el MIR tienen voceros que afirman que es posible terminar con el régimen teniendo como única base orgánica a los grupos más radicalizados del movimiento popular, y que piensan que al perseverar en un activo enfrentamiento y hostigamiento al aparato represivo de Pinochet, sin excluir un empleo creciente de la violencia que ya despliega el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, asociado al PC, acabarán arrastrando a la lucha a los sectores del centro, inicialmente vacilantes.

La persistencia de este desacuerdo ha hecho que en la práctica el General Pinochet enfrente a dos oposiciones descoordinadas en lugar de una sola, lo que aumenta considerablemente su rango de maniobra, no sólo en cuanto a la actividad represiva sino especialmente en lo relativo al empleo del enorme aparato oficial de comunicaciones. Desde allí se acentúan los desacuerdos de los opositores, se definen los temas en debate y se impulsan verdaderas operaciones para profundizar la contraposición existente entre el centro y la izquierda.

De este modo, tres años después de iniciada la confrontación abierta de los opositores democráticos con la dictadura, no existe todavía un plan de movilización ni una estrategia común para todos y esto relativiza bastante los importantes avances logrados.

Tal situación debiera ser superada en el tiempo inmediato a partir de una actitud constructiva que asuma la necesidad de la unidad de todos los opositores en base a un debate franco de los desacuerdos estratégicos que subsisten. Estamos convencidos que semejante discusión probaría rápidamente que la propia

naturaleza del régimen autoritario chileno impide cualquier negociación exitosa, al menos mientras el General Pinochet mantenga las cuotas de poder de que actualmente dispone. Igualmente, permitiría establecer que una agudización indiscriminada del conflicto y, sobre todo, el desarrollo de acciones de fuerza que la dictadura puede calificar como "terrorismo" (como la colocación de bombas en lugares públicos, el secuestro o la "ejecución de partidarios de Pinochet") dificulta el desarrollo de las acciones de masas y tiende a aislar a los grupos más radicales del resto del pueblo, facilitando su represión.

Si todos parten de una actitud inicial abierta y constructiva y si el debate se establece a partir de un descarte de aquellas estrategias que, al no responder a las características de la realidad chilena, dividen y parcializan a la oposición para concentrarse en la definición de las etapas y de los planes concretos de la movilización social, es posible revertir en corto tiempo las tendencias que esterilizan hasta ahora a las fuerzas democráticas y constituir un movimiento nacional que sea capaz de impulsar exitosamente la lucha por el restablecimiento de la democracia.¹² Para ello, no se parte de cero sino que se cuenta con los importantes avances que, pese a todo, se han logrado en los últimos tres años.

3. *El balance positivo de 1985*

1985 resultó ser un año positivo para la oposición al General Pinochet. Esto, a pesar de que desde el punto de vista de la represión fue también un año terrible, que la totalidad de los observadores coincidieron en calificar como muchísimo más duro que los precedentes. Prácticamente todo el primer semestre transcurrió bajo estado de sitio y a lo largo de él las diferentes expresiones de desacuerdo fueron desarticuladas con gran violencia. Aumentaron las relegaciones y las detenciones prolongadas, hubo un mayor número de asesinatos políticos y se reabrieron antiguos campos de concentración como el de Pisagua.

12 En esta dirección desempeña un papel muy positivo el fortalecimiento de la Intransigencia Democrática. Esta organización fue creada en abril de 1985 por 16 personalidades democráticas de derecha, centro e izquierda que subrayaron que sólo mediante una lucha activa se podría poner en término a la dictadura de Pinochet. En enero de 1986 la ID presentó un amplio Plan de Acción para 1986 e inició la creación de una organización de carácter nacional para respaldarlo al mismo tiempo que constituyó un Comité Ejecutivo de 17 miembros y un Consejo Directivo formado por 135 personalidades de los más variados campos. En el seno de la ID participan representantes de los Partidos Republicano, Humanista, Radical, todas las organizaciones del área socialista y los partidos integrantes del MDP, además de independientes.

Pese a ello, desde un punto de vista político 1985 tuvo un desenlace diferente a los anteriores: En 1983 y 1984 las fuerzas de oposición desarrollaron un ciclo enteramente estéril que se puede resumir del siguiente modo: los sectores democráticos ocuparon los meses iniciales, que corresponden a las vacaciones de verano, en planificar las acciones; a contar de marzo hicieron esporádicas manifestaciones y protestas para ir acumulando fuerzas. Luego volcaron sus esfuerzos en torno a los actos del 1o. de mayo. Sólo después de esa fecha se iniciaron las acciones mayores marcadas por un "crescendo" en los días claves del mes de septiembre (el 4, fecha de celebración de las elecciones presidenciales durante la etapa democrática y el 11, aniversario del golpe). A partir de allí el impulso permitió realizar grandes movilizaciones en octubre y la primera parte de noviembre, pero al no obtenerse resultados concretos que afectaran las bases mismas del poder personal de Pinochet al aproximarse las fiestas de fin de año se produjo una desmovilización que hizo de todo el período un "ejercicio de suma cero".

En 1985, en cambio, hubo un anudamiento distinto de los acontecimientos que, como resultado, ha dejado a los sectores democráticos con mayor iniciativa y frente a un conjunto de operaciones abiertas que son susceptibles de ser profundizadas durante 1986.

Este balance "positivo" puede resumirse en tres tendencias:

A. El terrorismo organizado por el régimen quedó en evidencia para la mayoría de la población.¹³

Uno de los grandes problemas enfrentados por la disidencia chilena ha sido, hasta ahora, la dificultad para poner en claro la responsabilidad del gobierno en las acciones masivas de violación de los derechos humanos. Más allá de la evidencia abrumadora de muchas pruebas como las acumuladas en torno a las masacres de Lonquén y Yumbel, el caso de los desaparecidos o a los asesinatos del General Carlos Prats y de Orlando Letelier, para una buena parte de la opinión interna no estaba claro el nexo entre esas acciones y

los más altos círculos del régimen.¹⁴

El 30 de marzo de 1985 ocurrió, sin embargo, un hecho terrible que logró conmocionar a la opinión pública chilena con mucho mayor fuerza que cualquier episodio anterior, originando una investigación judicial cuyas consecuencias resultaron también decisivas. Tres dirigentes del Partido Comunista —José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino— fueron secuestrados en medio de espectaculares operativos de seguridad: dos de ellos fueron capturados por la fuerza, ante centenares de niños, en un establecimiento educacional, al inicio de sus actividades y el tercero, raptado a mediodía, en una de las calles más importantes y concurridas de Santiago; horas después fueron encontrados degollados, con huellas de terribles torturas en un lugar vecino al aeropuerto internacional de Pudahuel.

La conmoción provocada por el hallazgo y sus circunstancias determinó la designación de un Ministro en visita perteneciente a la Corte de Apelaciones de Santiago: José Cánovas Robles. Este, un antiguo magistrado sin conexiones políticas, con una tradición de rectitud y acuciosidad en su trabajo, inició una investigación que rápidamente lo condujo a los organismos de seguridad del gobierno, especialmente a la Dirección de Investigaciones y Comunicación de Carabineros (DICOMCAR), un órgano especial anti-subversivo de dicho Cuerpo policial. Con apoyo de muchos informantes fue cerrando el cerco en torno a los autores del crimen y finalmente, en la primera semana de agosto de 1985 dictó una espectacular resolución encargando reos y deteniendo a varios altos funcionarios de este organismo incluyendo al propio jefe de la DICOMCAR, el Coronel de Carabineros, Luis Fontaine.

Esta situación, que representaba el primer acto de verdadera autonomía del Poder Judicial frente a la dictadura, provocó una profunda crisis política. Como consecuencia de ello, debió renunciar a su cargo el Director General de Carabineros, el General César Mendoza, uno de los cuatro miembros de la Junta que organizara el Golpe en 1973 y uno de los aliados más estrechos del General Pinochet.¹⁵ El efecto más profundo de este procreó —bien reflejado en varias encuestas de opinión— fue la mayoritaria percepción en-

13 La asociación del régimen de Pinochet con el "terrorismo de Estado" es un hecho central, porque fija en el complejo escenario político chileno el "origen" y las "fuentes" de la violencia. Esta, organizada de modo sistemático y con toda clase de recursos, se halla en el gobierno. Tiene un carácter estratégico, pues el régimen no podría vivir sin ella. Por lo mismo, quienes desean que exista una convivencia civilizada y condiciones de seguridad efectiva en la sociedad comienzan a advertir que esto sólo será posible terminando con quien produce la violencia, es decir ayudando a poner término a la dictadura de Pinochet.

14 En el caso chileno, a diferencia de lo ocurrido en otras dictaduras se dispone de un exhaustivo recuento de todas las violaciones realizadas a los derechos humanos. Este ha sido hecho, caso a caso, por el Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad de la Iglesia Católica, una entidad que desde 1974 ha asistido judicialmente a todos los perseguidos por la dictadura y a sus familias.

15 El General Mendoza explicó a los periodistas que había dejado su cargo "porque se me antojó nomás. . ." A continuación agregó, acudiendo a una figura del lenguaje popular chileno ". . . se está desgranando el choclo (elote). . ."

tre la opinión pública de que había una directa vinculación entre los crímenes que padecían los opositores y el propio gobierno.¹⁶ En pocas semanas la evidencia del terrorismo de estado y el conocimiento de la maquinaria de los organismos de seguridad que incluía sus múltiples recursos y estructura operativa de los aparatos especiales pasó a ser un dato aceptado para amplios círculos, especialmente los sectores de ingresos medios y altos. Esto trajo un efecto erosionador, paulatino pero sostenido, que ha incidido como pocos en la reducción de la base social de apoyo de Pinochet.

Como un efecto indirecto, pero también importante, la conducta del Ministro Cánovas sirvió para activar otros procesos pendientes por crímenes y violaciones de los derechos humanos y para multiplicar las denuncias sobre este tema.¹⁷ Así en la parte final del año, se logró acumular en diferentes juicios una abrumadora evidencia respecto de la forma en que un Comando Especial Conjunto en que participaron miembros de diversas ramas de las Fuerzas Armadas y de los organismos de seguridad planificó y ejecutó la masiva desaparición de unos 2000 dirigentes políticos y sociales entre 1975 y 1977. Aunque debido a la capacidad de maniobra que todavía conserva Pinochet y a su influencia sobre la mayoría de los miembros del Poder Judicial, resulta muy probable que estos procesos no lleguen a la fase de total esclarecimiento, es igualmente cierto que su impacto ha sido decisivo y ha cambiado la percepción e interpretación que la mayoría de los chilenos tiene respecto de la responsabilidad del General Pinochet y de sus colaboradores más inmediatos en estos hechos. Y esta apreciación, sin duda, tiene un gran valor político y está llamada a producir efectos de alcance permanente.

B. La suscripción del Acuerdo Nacional (AN)

Pocas semanas después de la impactante resolución del Ministro Cánovas, el 25 de agosto, un segundo he-

cho sustantivo contribuyó a cambiar el escenario político chileno: once partidos políticos, acogiendo una invitación del Cardenal Arzobispo de Santiago, Juan Francisco Fresno, suscribieron un "Acuerdo Nacional para la transición a una democracia plena", un documento programático en que trazaban las bases para la transición hacia un sistema político democrático en Chile.

Dicho texto proponía establecer un régimen político fundado en la soberanía popular y en la fiscalización y control de los actos de las diferentes autoridades. Reafirmaba el principio de la independencia y autonomía de los poderes del estado y abogaba por un pleno restablecimiento de las libertades públicas. Reconocía el valor de los partidos políticos y definía condiciones para su libre funcionamiento, del mismo modo que restablecía el derecho a la existencia de sindicatos, colegios profesionales, federaciones estudiantiles y otras organizaciones sociales. En materia económica propiciaba una economía mixta en que debían coexistir la propiedad e iniciativa del Estado con la del sector privado. Planteaba igualmente, una atención prioritaria del futuro gobierno democrático para lograr la solución de los problemas más dramáticos provocados por la crisis económica que se arrastra desde 1982: la necesidad de elaborar un programa nacional de empleo y la búsqueda de la satisfacción de las necesidades básicas de los sectores más pobres. El Acuerdo Nacional incluía, además, un capítulo especial sobre medidas inmediatas que, al recoger las aspiraciones de prácticamente la totalidad de los grupos opositores, establecía una pauta muy precisa para evaluar el inicio y el avance de la transición. Ante estas medidas se contemplaban: el retorno del exilio, el fin de la intervención militar en las universidades, la suspensión de todos los estados de excepción, el fin del receso político, el inmediato restablecimiento del funcionamiento de los partidos y la convocatoria de elecciones con plena garantía para elegir nuevas autoridades en los poderes ejecutivo y legislativo.¹⁸

16 Conforme a una encuesta efectuada por la firma Diagnos en septiembre de 1985 un 82% de los encuestados creía que los responsables de los degollamientos pertenecían a los cuerpos de seguridad del gobierno y habían actuado por orden superior. Un porcentaje semejante considerado sin embargo, que nunca se lograría identificar y castigar a los autores materiales.

17 El caso que avanzó más espectacularmente fue el que investiga el Ministro en visita, Carlos Cerda de la Corte de Apelaciones de Santiago por el secuestro y desaparición en 1975 y 1976 de once altos dirigentes del Partido Comunista. En este proceso se identificó como responsables en la detención a tres colaboradores de los servicios de seguridad del gobierno —Otto Trujillo, Miguel Reyno y Roberto Fuentes Morrison, este último perteneciente a la Fuerza Aérea de Chile— quienes entregaron un completo detalle acerca de la forma en que operaba el Comando Especial Conjunto, organizado por el gobierno.

18 Al interior del Acuerdo se superó bien el difícil desacuerdo inicial en torno al pleno reconocimiento legal de los partidos de izquierda. En un orden lógico la regulación establecida es la siguiente: 1) de acuerdo al punto cinco de las medidas inmediatas se establecería "el fin del receso político y el pleno y normal funcionamiento de los partidos políticos existentes en septiembre de 1973, lo que incluye a partidos como el MAPU, Socialista, Izquierda Cristiana y Comunista; 2) en el futuro sistema político se consagraría como un derecho expreso el pluralismo político y el derecho a organizar partidos políticos. Un Tribunal Constitucional democráticamente generado y que actuaría conforme a derecho, podría disponer la cancelación del registro de un partido si éste contraviene con sus conductas o declaración de principios, postulados democráticos tales como el principio de alternancia en el poder, el de legalidad, el de vigencia de los derechos humanos, usar la violencia contra la autoridad democrática o el de la pluralidad de las organizaciones políticas.

La suscripción del Acuerdo Nacional alteró también en forma decisiva el proceso político chileno. Este apareció como un consenso positivo de los diferentes sectores de la oposición que hasta ese momento se hallaban dispersos y, aunque no participaron en su elaboración y suscripción algunos de los más importantes partidos de izquierda, agrupados en el MDP, representó la más amplia alianza de opositores de derecha, centro e izquierda lograda en los doce años de dictadura. En términos prácticos levantó una propuesta programática para el orden político y social post autoritario y puso fin a uno de los argumentos más usados por el General Pinochet: la afirmación de que la única alternativa a su permanencia en el poder eran el caos y la anarquía debido a la imposibilidad de los disidentes para ponerse de acuerdo en torno a una propuesta común.

El hecho de que entre los firmantes de este documento programático aparecieran dos partidos de derecha —la Unión Nacional (UN) y el Partido Nacional (PN)— que hasta poco tiempo antes había colaborado con el gobierno fue visto como una manifestación evidente de la reducción de la base de apoyo del General Pinochet. Además el activo rol que tuvo en su gestación la Iglesia Católica que ha ganado un amplio prestigio en estos años por sus acciones de defensa de los derechos humanos, revistió al Acuerdo Nacional de una respetabilidad todavía mayor.

Por lo mismo, sus efectos concretos fueron amplios e importantes.

Un primer campo en que el AN repercutió fue el de las Fuerzas Armadas. Aunque éstas constituyen una verdadera "caja negra" en el proceso político chileno¹⁹ hubo numerosas evidencias de que el documento opositor

había sido conocido y discutido por oficiales de las diversas ramas. Aunque esto está lejos de significar una adhesión de ellos a su contenido, los aspectos de deliberación política que el gesto entraña son importantes. Más explícitamente, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei expresó en forma pública su valorización del AN y lo propio hicieron en forma privada ante Obispos de la Iglesia Católica, varios generales del Ejército.

En segundo lugar, el AN tuvo repercusiones positivas en el propio seno de la Iglesia. En ésta se registraba, a mediados de 1985, un desacuerdo respecto a la actitud que se debía tener ante el General Pinochet. Un grupo de obispos aconsejaba la prescindencia política, mientras otros recomendaban asumir una postura pública y activa que subrayara las críticas de la Iglesia al régimen. En el seno de la Conferencia Episcopal, la máxima instancia colegiada de la Iglesia chilena se había registrado un empate de 14 votos entre ambos sectores, lo que creaba una situación difícil. Con la suscripción del AN, esta disparidad se superó y en forma prácticamente unánime la misma Conferencia Episcopal proclamó su apoyo público a esta iniciativa.

Finalmente, el AN tuvo un sensible impacto internacional, provocando una reactivación de la solidaridad con las fuerzas democráticas chilenas, y reavivando las críticas a Pinochet. La Comunidad Económica Europea expresó unánimemente su apoyo al AN en octubre y lo propio hizo el Departamento de Estado norteamericano. Esta etapa coincidió con la instalación de un nuevo embajador (Harry Barnes) en Chile de mucho mayor rango, quien asumió una postura más independiente y crítica frente al gobierno, desde el inicio de su mandato, lo que coincide con los anuncios hechos en Washington de considerar superada la etapa de "diplomacia silenciosa" frente al gobierno de Santiago.²⁰

Pero donde finalmente el AN tuvo un efecto más importante fue en relación a clarificar los caminos que debía recorrer la oposición en su búsqueda de la reconquista democrática. El planteamiento de este problema estuvo asociado a fuertes críticas hechas por sectores del MDP (especialmente el PC) que subrayaban el "peligro" de que el Acuerdo se convirtiera en un espacio de negociación con el régimen para llegar a una "democracia restringida", conforme a los nuevos planes de la administración Reagan, respalda-

Tales pautas que coinciden en plenitud con la propuesta del Grupo de Estudios Constitucionales que agrupa a juristas de todas las corrientes opositoras, obvio es decirlo, no constituyen ninguna restricción o amenaza para los partidos de izquierda y, de haber existido en 1973, habrían sido un útil instrumento para que el gobierno del Presidente Allende hubiera podido defender mejor el orden constitucional.

19 Durante largos años existió en Chile un completo vacío en las ciencias sociales en cuanto a los estudios acerca de las Fuerzas Armadas. Los dos trabajos más serios habían sido elaborados por autores extranjeros: un francés (Alain Joxe), *Las Fuerzas Armadas en el Sistema Político Chileno* (Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1970) y un norteamericano (Frederick Nunn), *The Military in Chilean Politics* (University of New Mexico Press, 1975). Más recientemente, sin embargo, un grupo de investigadores sociales chilenos ha realizado interesantes aportes sobre el punto, especialmente Fernando Bustamante, Felipe Agüero y Augusto Varas de FLACSO (Chile: democracia, Fuerzas Armadas, 1980) y Hugo Fruhling, Carlos Portales y Augusto Varas, *Estado y Fuerzas Armadas*, Santiago, 1982), Genaro Arriagada (*La Política Militar de Pinochet y El Pensamiento Político de los Militares*) y Antonio Cavalla (*Las Fuerzas Armadas y las Relaciones Estados Unidos-América Latina*).

20 Los cambios en la política norteamericana son evaluados en forma diferente entre los opositores chilenos. Algunos (especialmente el PC) subrayan su temor de que un recambio pueda fundar un nuevo modelo autoritario con ciertas perspectivas de estabilidad. Otros (los partidos del área socialista) estiman que la tarea de hoy es sacar a Pinochet y que cualquier otro escenario autoritario posterior sería inestable y ofrecería mejores condiciones a los sectores opositores para conseguir un sistema político abierto.

dos, según esta versión, por el Papa Juan Pablo II. Por lo mismo, se insistía en que sus efectos serían una división de la oposición y una disminución de la movilización social.

En el seno de los adherentes al AN se registró también desde el comienzo, una disparidad respecto a la mejor manera de asegurar su realización. Los sectores de derecha (UN, PN) insistieron en que la única forma de asegurar el cumplimiento de esta propuesta era mediante un diálogo con el propio gobierno. El resto de los participantes, con mayor o menor énfasis, imaginaba que sólo una intensificación de la movilización social que demostrara el carácter mayoritario en el país de los firmantes del texto podría conducir a su aplicación eficaz. Esto originó durante varios meses una indudable tensión, puesto que ambas fórmulas no resultaban compatibles. La mayor complicación para los partidos de izquierda del AN (la IC, y los sectores socialistas de Briones y Mandujano), consistía en que no podían descalificar *a priori* la opción de la negociación mientras los hechos no les dieran la razón, limitándose a manifestar escepticismo respecto a la viabilidad de ésta. El asunto llegaba a un punto crítico si se tenía en cuenta que el gobierno podía haber mantenido indefinidamente una postura de ambigüedad con sólo no descalificar públicamente el AN y mientras esto ocurriera no resultaba posible exigir una vinculación entre el Acuerdo y los programas de movilización social.

Sorpresivamente, sin embargo, a fines de diciembre el asunto fue despejado y resuelto por el propio General Pinochet. El día 24 de ese mes el titular del poder ejecutivo recibió en una audiencia, que le había sido solicitada varios meses antes, al Arzobispo de Santiago, Cardenal Fresno. El encuentro fue breve y tenso, pues cuando el Cardenal le planteó el punto, Pinochet manifestó bruscamente que a él "le cargan (le fastidian) los sacerdotes metidos en política" y que personalmente ha dado órdenes que nadie de su gobierno reciba a los coordinadores del AN o a sus adherentes por lo que era mejor respecto de ese punto "dar vuelta a la hoja".

Esta actitud que se vino a sumar a la negativa del Ministro del Interior de recibir a los tres asesores directos del Cardenal que actuaban como Coordinadores del AN,²¹ lo que estableció la actitud de tajante rechazo del gobierno a cualquier posibilidad de nego-

ciación para una transición convenida hacia la democratización. De este modo ha desaparecido toda posibilidad de que en el seno del AN los sectores de derecha sigan pidiendo un diálogo con el régimen. Por el contrario la alternativa que se abre para el Acuerdo en 1986 es bien nítida. O sus miembros toman un papel activo en la movilización social o aceptan, con una conducta pasiva, el mantener a la dictadura.

C. El reforzamiento de la movilización social

El efecto combinado de la crisis provocada en torno al proceso del Ministro Cánovas y la firma del Acuerdo Nacional determinó, en el segundo semestre de 1985, una importante reactivación de las demandas y movilizaciones que diversas organizaciones sociales hicieron frente al gobierno. Especialmente notable fue el hecho de que participaran en estas actividades grupos que, por largo tiempo, habían observado un comportamiento pasivo o que, incluso, habían dado su apoyo al General Pinochet. Esto, a su vez, permitió un nuevo margen de maniobra de los grupos más activos que actúan desde hace más tiempo, los que pudieron intensificar con mayor éxito sus actividades. Esto se tradujo, por ejemplo, en el notable éxito alcanzado por las protestas del 4 y 5 de septiembre que virtualmente paralizaron a Santiago y otras ciudades de Chile, así como en las activas manifestaciones de solidaridad que recibieron luego varias decenas de los dirigentes convocantes a dicho evento cuando fueron encarcelados por disposición del General Pinochet.

Como se ha manifestado apropiadamente en un informe de coyuntura política, "durante el segundo semestre de 1985 se pudo apreciar un fuerte repunte y una ampliación de los conflictos sectoriales y regionales que ha debido enfrentar el gobierno: movilizaciones estudiantiles que logran remover a tres decanos y obtener la libertad de los dirigentes encarcelados por el gobierno; huelga de taxistas; "taco" o bloqueo carretero de los camioneros, paralizaciones parciales de línea de autobuses, movimiento de los deudores hipotecarios; organización de agricultores, camioneros y comerciantes del sur en contra de las ejecuciones judiciales de deudas morosas; huelga de estibadores y trabajadores portuarios; marcha de 5,000 mineros del cobre y sus familias desde Chuquicamata a Calama; movilizaciones o protestas nacionales del 9 de agosto, del 4 y 5 de septiembre, del 15 de octubre y del 5 y 6

21 Durante las reuniones en que se discutió el texto del Acuerdo en el Círculo Español de Santiago el Cardenal Fresno, que no asistía a ellas, delegó su representación en tres asesores directos suyos: Sergio Molina, ex Ministro de Hacienda del Presidente Frei y ex Vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano, Fernando Léniz, ex-ministro de Economía del General Pinochet, luego alejado del gobierno y José Zabala, un empresario católico con una larga partici-

pación en agrupaciones empresariales cristianas. Luego de aprobado el Acuerdo Nacional estos asesores del Cardenal fueron invitados por los dirigentes políticos a asumir las tareas de convocatoria y coordinación futura del grupo.

de noviembre; protestas y movilizaciones de médicos; huelga de empleados del Poder Judicial; gran concentración del 21 de noviembre en el Parque O'Higgins, etcétera."²²

Todas estas actividades cobran mayor significación si se las vincula con el tema más amplio de la crisis chilena. Hace casi treinta años, Jorge Ahumada habló de "la crisis integral de Chile".²³ Esta expresión tiene hoy más significación que nunca por la diversidad de los campos en que la desarticulación del proyecto nacional se manifiesta.

Hay una dimensión política de la crisis que se refleja en el hecho de que el régimen de Pinochet carece de proyecto político y su único empeño consiste en durar tanto tiempo cuanto pueda. El país sigue anclado en un modelo político excluyente e intolerable que no busca moverse hacia ningún lado. Ni siquiera se ejecuta la "transición" hacia una democracia restringida que la Constitución de Pinochet había definido, como lo prueba la postergación en el despacho de las llamadas "leyes políticas".

Hay un ámbito económico de la crisis que se manifiesta, casi ininterrumpidamente, desde fines de 1981. En 1982, el producto nacional chileno decreció casi un 15%, lo que sumado al impacto similar de la caída económica registrada en 1975 ha hecho retroceder el producto per cápita del país a los niveles de 1966. La cesantía llega a cerca de un 30% si se incluyen los contingentes que disfrazan las cifras del PEM y del POJH.²⁴ Más de un tercio de los chilenos viven en condiciones de extrema pobreza y recién se empieza a evaluar el impacto permanente de la desindustrialización que cerró fábricas y terminó con actividades pro-

ductivas establecidas por todos los chilenos en un esfuerzo de décadas.

Hay también una esfera social de la crisis que se expresa en la dramática desintegración nacional que vive Chile. Pocas cosas sorprenden tanto a los observadores extranjeros como la total falta de sensibilidad del gobierno y sus colaboradores con los sectores más pobres de la nación a los que mira y trata como "enemigos". En Chile existe una suerte de *apartheid* que aísla el mundo de la opulencia y el confort europeo de los barrios acomodados con la dramática realidad de las poblaciones marginales que se asemejan a los barrios más miserables de Haití, Gabón o Bangladesh. Las políticas de salud, vivienda y educación se diseñan como si su objetivo fuera retirar beneficios a los sectores más desamparados y condenados a una existencia sin destino.

A todo esto se ha sumado, por último, en 1985, la percepción de una crisis moral. "Terremoto moral" llamó la Iglesia Católica²⁵ al brutal degollamiento de los tres dirigentes comunistas, indicando la gravedad que tiene el hecho de que los chilenos sientan que los cuerpos e instituciones que debieran garantizar la seguridad de las personas son, en cambio, un centro de planeamiento y de ejecución de actividades criminales financiadas con recursos públicos y al amparo de la impunidad que otorga el poder estatal. Cuando entre amplios sectores del país se tiene la creciente evidencia de que el gobierno es directamente responsable de las situaciones más brutales y contrarias a la tradición histórica, las bases de la convivencia nacional están aniquiladas, porque la autoridad carece de credibilidad y legitimidad.

Esta sensación de que el país se destruye irrecuperablemente plantea ineludiblemente un problema ético: plantea a cada chileno el dilema de asumir que sólo con respuestas activas se puede detener la desintegración nacional y se evita el riesgo de la gangrena que se extiende sobre el cuerpo social. Por eso, en un contexto como el descrito, resulta claro que participar decididamente en la lucha social es la única forma de asumir un compromiso concreto con el destino de Chile.

4. Las tareas para 1986

A. El cuadro político de 1986

Uno de los pocos puntos en que han coincidido todos los dirigentes de la oposición chilena es en asignar

22 "Informe Trimestral de Coyuntura", Octubre-Diciembre de 1985, Grupo de Análisis Político, Mimeo, s/f, p. 3.

23 Ahumada, uno de los más notables economistas y planificadores que Chile ha producido fue el encargado de proporcionar el marco histórico y los fundamentos del programa de la "Revolución en Libertad" propuesta por la Democracia Cristiana en 1964. En 1957, luego de prestar servicios a varios gobiernos latinoamericanos volvió a Chile y publicó el libro *En Vez de la Miseria*, un ensayo que ya se ha vuelto clásico en el pensamiento social chileno. Allí formuló el esquema de la crisis integral del país, que formalizó más ampliamente en 1965, pocos meses antes de su muerte en un pequeño libro titulado justamente *La Crisis Integral de Chile* (Editorial Universitaria, Santiago).

24 Se trata de dos programas organizados por el gobierno a través de las municipalidades. El programa de empleo mínimo (PEM) absorbe en obras públicas y de ornato y el programa ocupacional de jefes de hogar (POJH) contrata a personal más calificado (incluyendo profesionales) para los mismos fines. El salario de los primeros asciende a unos 25 dólares mensuales en tanto que la remuneración de los segundos representa un promedio de unos 40 dólares mensuales. Como ambas cantidades están muy por debajo de las cifras básicas de subsistencia en Chile muchos economistas rehusan aceptar el criterio de considerar "ocupados" para efectos estadísticos a quienes desempeñan estas labores.

25 Llamado a la Reconciliación Nacional hecho por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, junio de 1985.

a 1986 una importancia decisiva.²⁶ Este consenso se explica por el impacto acumulado de los factores que ya analizáramos: las evidencias de la responsabilidad del gobierno en actividades de terrorismo de Estado crean condiciones para plantear abiertamente la central cuestión de la legitimidad del régimen, mientras que la negativa explícita de éste para contribuir a una solución negociada de la crisis no deja a los opositores democráticos otro camino que el de la demostración social de su propia condición mayoritaria.

A ello se une la restricción imperiosa de los propios "tiempos políticos". El mandato actual del General Pinochet concluiría en marzo de 1989 y las elecciones en que debe elegirse presidente tendrían lugar en noviembre de 1988. Esto hace que el año 1986 sea prácticamente el último período "útil" para buscar una modificación de dicho cronograma. A esta situación se agrega un hecho de gran importancia política que puede actuar como hito divisorio de toda esta etapa: la venida a Chile del Papa Juan Pablo II, programada y anunciada con inusual anticipación para marzo de 1987.²⁷ Así las cosas, los dirigentes de las organizaciones democráticas piensan razonablemente que, desde ahora hasta ese momento, se vivirán las condiciones más favorables para lograr un desenlace democrático de la crisis. Y esto es lo que ha hecho que al plan de acción para 1986 se le asigne una enorme importancia, algo que coincide con las percepciones y la sensibilidad de la mayoría de la gente. Se estima, en síntesis, que este es el período decisivo para desplegar —con efectivas posibilidades de éxito— todas las fuerzas acumuladas por los sectores democráticos.

Este crucial enfrentamiento tendrá lugar dentro de las condiciones de importante poderío e iniciativa política de ambos actores en pugna que ya hemos subrayado. El General Pinochet ha enfrentado todo el período de asedio de sus opositores, que ya casi dura tres años, sin perder nunca la capacidad para diseñar operaciones de respuesta y contragolpear a las muchas ofensivas y cercos colocados por los opositores. Ha mostrado también, en todo momento, que retiene la posibilidad de emplear la fuerza militar y policial, pues sigue contando con el respaldo de las diferentes ramas

de las Fuerzas Armadas y de seguridad que nunca han dejado de ejecutar cabalmente sus instrucciones.

La oposición, por su parte, ha ido acrecentando sus fuerzas en todo este tiempo. Las diferentes organizaciones sociales, en estado virtualmente germinal en 1983, se han reconstruido y fortalecido. Igualmente, han logrado una significativa capacidad de concertación. La correlación de fuerzas civiles ha cambiado igualmente, aumentando el caudal de los que se oponen al régimen autoritario. En un recuento muy sumario, se podría decir que en un país que hasta 1973 estuvo dividido casi simétricamente en tres tercios, hoy la oposición suma a la totalidad de la izquierda, la totalidad del centro y, al menos una mitad de las fuerzas de derecha. Esto permite sostener, como lo confirman las encuestas de opinión, que quienes desean, con diferentes fórmulas, que el gobierno del General Pinochet concluya totalizan cerca del 85% de la opinión nacional, en tanto que poco más de un 15% expresa su adhesión a Pinochet sin reservas. Pero esta oposición mayoritaria sigue en este momento dividida, sin estrategia y un plan de acción común, lo que restringe enormemente la capacidad de dar expresión al poderío acumulado.

En el escenario político de 1986 existirán algunas constantes que es indispensable tener en cuenta: probablemente se agudizará la crisis política y se mantendrá la tendencia a la polarización que ha caracterizado a los años anteriores; se mantendrá también el funcionamiento "anémico" de la economía chilena, lo que hace que sea poco razonable esperar modificaciones espectaculares derivadas de la situación económica. Esto implica un cuadro en que el producto se aproximará a un crecimiento cero, el precio del cobre oscilará dentro de los rangos de bajo precio de los años anteriores y los indicadores sociales, especialmente el de desocupación, no tenderán a repuntar.²⁸ Del mismo modo, seguirá siendo más fácil la concertación social que el acuerdo de los actores políticos. Estos últimos, en su expresión institucional, a pesar de sus dificultades internas tenderán a mantenerse. Por ello no cabe esperar una crisis que ponga término a la Alianza Democrática o al Movimiento Democrático

26 Ver, en Fortín Mapocho, 23 de diciembre de 1985, una amplia encuesta hecha a dirigentes de todos los partidos de oposición que coinciden en calificar a 1986 como "el año clave" para poner término a la dictadura.

27 El anuncio de la visita papal ha originado variadas reacciones. El ex diputado Fernando Buzeta, de la Izquierda Cristiana, ha convocado junto a un grupo de colegas suyos, a las comunidades cristianas de base a recoger firmas en todo el país para pedirle al Papa que no visite Chile hasta que en el país exista un gobierno democrático, desencadenando una campaña que puede recibir una importante adhesión.

28 El precio del cobre ha experimentado en los últimos tres años una sensible declinación como consecuencia de la substitución, el desarrollo de procesos de miniautorización de los diseños industriales y de la explotación de nuevas minas en los años precedentes. Actualmente se cotiza en alrededor de 65 centavos de dólar la libra, lo que representa un valor, en términos reales, del 40% del que tenía hace 20 años. Aunque este factor de reducción de ingreso de divisas pudiera haberse paliado por las reducciones importantes en los precios del petróleo que Chile importa, hay que considerar que la deuda externa ha sobrepasado los 21 mil millones de dólares e impone restricciones dramáticas a la economía chilena.

Popular; también hay que seguir contando con un grado significativo de dispersión de los partidos del área socialista, porque a pesar de la terminación del Bloque Socialista²⁹ los dos partidos mayores de origen histórico (Almeyda y Briones) se seguirán excluyendo mutuamente y las fuerzas menores del mismo tronco no tienen capacidad para modificar esa conducta.

Del mismo modo, persistirá en lo substancial la dinámica de represión del régimen que originará, de forma también inevitable, expresiones de violencia de algunas organizaciones de izquierda. La violencia será así un dato permanente en el escenario político chileno, sea por la acción implícita del gobierno o por amenazas potenciales de sectores de la izquierda.

Pensamos también que una planeación política realista obliga a considerar otros factores relevantes variables, sobre lo que es posible influir. Entre estos se incluyen la dinámica entre aproximación y alejamiento entre la AD y el MDP, la profundidad y extensión de los acuerdos del conjunto de la izquierda y del área socialista para prefigurar una conducta común de la oposición. Del mismo modo habrá que prestar atención a las hipótesis posibles de respuesta del régimen y a los conflictos que se puedan plantear al interior de las Fuerzas Armadas como consecuencia de la necesaria línea dura que deberá tener el gobierno ante las demandas de las organizaciones sociales. En este sentido, los planteamientos más claros que los sectores de oposición puedan hacer sobre temas como la valorización de los derechos humanos; el rol institucional futuro de las Fuerzas Armadas; el impacto que sobre la seguridad nacional provoca el aislamiento del país que origina la dictadura o la mayor precisión de las condiciones de gobernabilidad democrática futura serán elementos cuya presentación no sería indiferente para las Fuerzas Armadas y que podrían incidir en su comportamiento.

B. El problema de la concertación política de la oposición.

El quehacer concreto de la oposición debería ser reflexionado y estructurado en diferentes niveles. Una primera gran área es definir los grados de viabilidad de la concertación política. Para ello puede ayudar significativamente un rápido avance destinado a formalizar y hacer más operativa la concertación social. Para esto, a su vez, se cuenta con un triángulo de actores disponibles que ya han probado una alta capacidad operativa: el Comando Nacional de Trabajadores (CNT), la Confederación Nacional de Federaciones Estudiantiles de Chile (CONFECH y la Confederación de Colegios Profesionales. A ellos tiende a agregarse la Confederación Unica de Pobladores, actualmente en avanzada gestación y las activas y valerosas organizaciones de mujeres. Así, mientras se consolida e irrumpe en el escenario, a corto plazo, una entidad Multigremial, se hará posible definir en mejor forma los grados y la modalidad de la articulación política. El entendimiento político de la oposición debe lograrse a partir de una estrategia común y de un plan de acción para 1986. Esquivar este punto resultó fatal en los años anteriores pues posibilitó autonomías operativas que acabaron por empantanar todos los entendimientos. A este respecto, no puede soslayarse una mayor precisión en torno a la efectiva adhesión al llamado camino de la derrota política de la dictadura y al énfasis en la lucha social y de masas.

Hacer una clara opción común por la lucha de masas puede favorecer decisivamente la unidad democrática. Este es un camino capaz de asegurar resultados concretos como lo prueba el hecho de que todas las conquistas parciales conseguidas hasta hoy han sido el resultado de la movilización. Además hay que tener en cuenta que una mayoría civil desplegada nacionalmente, al crecer y multiplicar su actividad tiende a anular la capacidad de empleo de la fuerza represiva del régimen. En cambio, el desarrollo de cualquier estrategia que parezca dirigirse a la derrota militar tiene el efecto opuesto: unifica a las Fuerzas Armadas en torno de Pinochet en la medida que corporiza un "enemigo armado" y que amenaza la existencia misma de las instituciones castrenses. Este terreno de enfrentamiento, por lo demás, es el que Pinochet mejor conoce, en el que es más fuerte, y en el que no teme ser derrotado. Por dichas razones resulta indispensable no sólo descartar, de un modo formal, una estrategia de derrota militar del régimen (como todos lo han hecho), sino también evitar aquellas acciones que a este respecto constituyen señales equívocas (como muchas de las que se atribuyen al FPMR) porque ellas también son causa de división en la oposición y

29 El Bloque Socialista (BS) había sido organizado en septiembre de 1983 e incluía al Comité Político de Unidad (CPU) del Partido Socialista, la Izquierda Cristiana (IC), el MAPU, el MAPU Obrero Campesino (MOC) y el Grupo de Convergencia Socialista (CS) intentaba ser un factor aglutinador del socialismo chileno y constituir un tercer referente nacional junto a la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular. En la práctica esta tentativa no fructificó por diversos factores: 1) en mayo de 1984 el CPU se dividió en dos grupos: el PS Dirección Carlos Briones y el PS Manuel Mandujano; 2) la presencia del PS Briones en la Alianza Democrática restó autonomía al BS y provocó un insoluble desacuerdo en su interior y 3) el BS no logró constituirse en un actor dinámico en la movilización social y popular. Por ello, luego de la marginación del PS Mandujano en octubre de 1984 se retiró de él la IC. En julio de 1985 se disolvió el MOC, ingresando la mayoría de sus miembros al PS Briones y lo propio ocurrió con el círculo de intelectuales y profesionales de la Convergencia Socialista. Todo esto determinó el cese de su funcionamiento desde febrero de 1986.

esto ayuda, objetivamente, a la dictadura.

La opción por un camino de derrota política implica entonces la discusión y el acuerdo en torno a una propuesta estratégica común de términos de la dictadura, la definición de los plazos y condiciones del período de transición y, muy especialmente, la concertación para colocar en común *todos* los recursos de las diferentes fuerzas opositoras (incluidas *todas* las capacidades de empleo de la fuerza) de tal forma que se pueda sustentar un único listado de acciones que se acuerden. Sólo así, se podrá llegar luego a discutir y a acordar, en concreto, un plan de movilización para 1986 que tenga posibilidades de aplicación exitosa.

Ahora bien, es necesario tener en claro que el hecho de que el conjunto de las fuerzas políticas opositoras concuerden una estrategia común con estos alcances no constituye una panacea ni despeja todos los desacuerdos que se pueden presentar al interior de la oposición. Pero sí implica establecer el único terreno en que se puede mantener la confianza mutua y en que las disparidades pueden ser resueltas de un modo constructivo.

Un problema práctico nada secundario es determinar a través de qué instancias orgánicas es posible lograr esta concertación. Pensamos que a la luz de las experiencias recientes es necesario buscar el acuerdo en función de los referentes más amplios y representativos. En concreto, esto puede intentarse a través de un diálogo entre la Alianza Democrática y la Intransigencia Democrática (ID). En el seno de ambas se agrupa prácticamente la totalidad de las organizaciones que han expresado su disposición en favor de un plan de movilización social para 1986. Ambos, igualmente, han elaborado propuestas específicas que constituyen un buen punto de partida para un diálogo eficaz y constructivo. Especialmente significativa es la circunstancia de que en la ID están presentes la totalidad de las organizaciones políticas de la Izquierda chilena.

C. El plan de acción para 1986 y sus objetivos

Si se logra resolver adecuadamente el problema de contar con un "Estado Mayor Conjunto" de la oposición la elaboración de un plan concreto de movilización para el año puede ser abordado sin que existan desacuerdos substanciales entre los diferentes partidos opositores.

Una secuencia óptima podría considerar las tres fases siguientes:

Fase 1: La acumulación de las demandas sectoriales y corporativas. En un primer momento se trata de identificar y hacer brotar las múltiples contradicciones existentes entre el pueblo chileno y la dictadura de

Pinochet. Para ello, debiera promoverse la formulación de los más variados pliegos y demandas reivindicativas de los diferentes sectores sociales del país. Esto originaría una aglomeración desordenada y compleja de peticiones de todo tipo: nacionales y regionales, de sectores activos y pasivos, de capas medias y populares, etcétera. El objetivo pedagógico de este ejercicio sería hacer comprender a la mayor cantidad de chilenos posible que los problemas actuales que en un contexto político distinto podrían ser resueltos, tienen su origen en la existencia y el mantenimiento del régimen autoritario.

Una ventaja adicional de esta operación es que ella pueda ser ejecutada en base a la concertación social y no necesita todavía de la existencia de una coordinación política. Con la suma de estas demandas debidamente ordenadas y seleccionadas se podría estructurar "El Pliego de Chile".³⁰

Fase 2: La formalización de la ilegitimidad del régimen de Pinochet.

Desde 1983, existe en Chile un dramático conflicto de legitimidades políticas. Esto ocurre porque entre el orden político consagrado en la Constitución de 1980, que el General Pinochet considera intangible, y las propuestas democráticas efectuadas por la oposición no hay ajuste ni concordancias posibles. En una palabra, el concepto mismo de "democracia" tiene significados antagónicos para el gobierno y la oposición. O, si se prefiere, el General Pinochet denomina como "democrático" a un régimen que no tiene ninguno de los elementos esenciales que caracterizan a las democracias que existen en diferentes lugares del mundo.

Este conflicto, sin embargo, no ha sido cabalmente entendido, hasta ahora, por un sector importante de la opinión pública. Por ello pensamos que es necesario, antes de desencadenar acciones decisivas para forzar un cambio de régimen, resolver este problema. Para ello creemos que es útil la propuesta que varios sectores han hecho de exigir la convocatoria a un plebiscito, en que se pueda dirimir justamente, por un pronunciamiento mayoritario de los chilenos, este desacuerdo. Proponer este mecanismo tiene la ventaja de que se ofrece una nueva y última oportunidad de solución pacífica para la crisis política que enfrenta Chile. Obviamente, tal llamado debería contener tanto los resguardos que los opositores exigen como el plazo que se otorga al gobierno para acoger la propuesta. Si este transcurriera sin respuesta o si las condiciones de una

30 El "Pliego de Chile" es un tipo de documento que ha sido utilizado en varios momentos de la historia social chilena para ordenar y dar un alcance global y político a las demandas que hacen las organizaciones al gobierno. En el caso del actual, su elaboración está a cargo del Comando Nacional de Trabajadores (CNT) entidad que agrupa a la casi totalidad del actual movimiento sindical chileno.

eventual convocatoria oficial no fueran satisfactorias debería producirse una *declaración formal de ilegitimidad* del régimen por medio de un manifiesto solemne que fuera firmado por un amplio listado de personalidades nacionales del campo político, social, cultural y religioso. Allí debiera convocarse a los chilenos a iniciar masivamente al desarrollo de acciones de desobediencia civil, como único medio eficaz para lograr un cambio de régimen político y restablecer condiciones de convivencia nacional.

Fase 3: El Paro Nacional y el término de la dictadura

Estamos convencidos que al resolverse públicamente la cuestión de la ilegitimidad del régimen autoritario, se dejaría el camino abierto para la organización de una jornada prolongada de paralización de las actividades políticas que tenga como objetivo la exigencia de un inmediato retorno a la democracia, en la que puedan participar los más amplios sectores productivos del país junto a aquellos grupos que padecen los efectos de la política económica en vigor (tales como cesantes, trabajadores ocasionales que viven en las poblaciones populares y estudiantiles).

La realización del Paro Nacional debiera ser la culminación de los diversos esfuerzos anteriores, lo que exige su cuidadosa preparación de tal manera que se constituya en el momento de máxima desobediencia civil en torno al objetivo de devolver un sistema de convivencia civilizada a Chile. Este debiera manifestar la firme decisión de los chilenos de suspender la creación de bienes y servicios en el país, hasta que cambie el gobierno.

La fuerza del Paro debiera crear un efecto en cadena al interior de las Fuerzas Armadas, al demostrar que el país no acepta ser gobernado por la fuerza y que sólo podrá ser normalizado al establecerse otra autoridad política, decisión que las Fuerzas Armadas están en condiciones de producir, reduciendo el costo social de una confrontación prolongada.

D. La urgencia de pensar en el Chile democrático del futuro

No podemos concluir este análisis sin insistir en la necesidad de dar, desde ahora, un contenido creativo y de futuro al quehacer de los sectores democráticos, perfilando con claridad las metas y objetivos que perseguirá un gobierno democrático en Chile. La experiencia de la fase declinante de todos los sistemas políticos autoritarios enseña que la gestación de un proyecto nacional alternativo al de la dictadura debe ser hecho en forma simultánea a la lucha por la democra-

tización. Más tarde, cuando el ordenamiento dictatorial ha sido liquidado, las múltiples urgencias del momento impiden la reflexión lúcida sobre el destino del país.

En estos doce años, Chile ha vivido una experiencia atípica en la medida en que el orden autoritario ha coexistido con un esfuerzo creador de investigación realizado en numerosas organizaciones culturales disidentes que han mantenido viva al interior de la sociedad la tradición de pensamiento crítico y excelencia académica que las universidades chilenas tuvieron en el período democrático. Existen, por lo mismo, numerosos estudios, proyectos de investigación, monografías y trabajos que suministran una base sólida y científica respecto del estado actual de Chile, de las perspectivas de la economía en sus diversos sectores, el sistema político, las fuerzas armadas, la organización social. Ellos constituyen un punto de partida serio para afianzar, en un trabajo de elaboración política, los objetivos más simples y angustiosos que demandan los chilenos, bien resumidos en la consigna "Pan, trabajo, justicia y libertad".

La proyección de estos objetivos planteados en diversos documentos (como el Manifiesto de la Alianza Democrática, el Manifiesto del Movimiento Democrático Popular, el Manifiesto por la Libertad y la Democracia, declaración fundacional de la Intransigencia Democrática o el Acuerdo Nacional), en un programa de gobierno provisional, puede dar una base técnicamente solvente a un Programa Nacional de Empleo, a un Programa de satisfacción de necesidades básicas de los sectores más pobres, a un Plan de Reindustrialización y de reactivación de actividades productivas, así como a nuevos Programas Nacionales de salud, educación y vivienda. Esto, unido a la definición de los criterios comunes para la composición y características del gobierno provisional, del proceso de reorganización de las Fuerzas Armadas y de saneamiento y modernización de la Administración Pública, permitiría establecer los fundamentos exactos del proceso de transición y quitarle ese carácter borroso y atemorizado que, para algunos, presenta la falta de definición sobre estos puntos.

Para quienes además de creer en la democracia creemos en la necesidad del progreso social, como ocurre con las fuerzas de izquierda, se plantea un desafío complementario: tenemos la necesidad de definir un proyecto nacional capaz de resolver también la segunda contradicción fundamental que enfrenta Chile, que no será resuelta con el término del régimen dictatorial. Nos referimos a la contradicción entre el capitalismo y el socialismo que, pensamos, se hará presente a poco andar cuando se intente dar una respuesta seria a los profundos males que el país arrastra. Estos doce

años han tenido un valor, más que simbólico, para mostrar las insuficiencias de una solución capitalista para la crisis de Chile. Durante una etapa tan prolongada que corresponde al mandato de dos gobiernos democráticos de acuerdo a la anterior Constitución de 1925, los defensores más tenaces de ese sistema han impuesto las condiciones que ellos mismos siempre definieron como ideales para la aplicación de sus planes: la ausencia de toda presión sindical y la total falta de interferencia de los "intereses políticos" en la marcha del gobierno. Han contado, además, con el apoyo irrestricto de la comunidad financiera internacional y durante un buen tiempo con préstamos y flujos financieros que acumularon la inmensa deuda externa que hoy tiene el país. El resultado final, sin embargo, ha sido el mayor desastre social y productivo que Chile ha experimentado en toda su historia. Si en estas condiciones "óptimas" para sus defensores el capitalismo fracasó de este modo; ¿Cabe esperar que sea

capaz de una propuesta exitosa en la etapa democrática futura?

Para quienes creemos en el socialismo, se plantea, entonces, como un imperativo patriótico, el recoger en una propuesta de conjunto las aspiraciones de profundización democrática, las metas de consolidación de la soberanía nacional y los objetivos de un cambio social más justo que surgirán como una legítima demanda de la mayoría de los chilenos cuando el país recupere el pleno ejercicio de la soberanía popular. Tenemos que restablecer una democracia con horizontes de progreso social y participación popular ininterrumpidos.

Sólo así la transición democrática culminará en un sistema político estable, capaz de fundar una convivencia social justa que devuelva a la vida de los chilenos, especialmente de los pobres, el horizonte de dignidad y esperanza que la dictadura les ha arrebatado todos estos años.